

Opinión

Edición papel digital

Elecciones y la lucha contra la corrupción

Umut Aydın
Directora del Instituto de Ciencia Política UC
Paz Cavada
Cientista política

El Caso Convenios, el Caso Audios y el Caso de licencias médicas en funcionarios públicos han expuesto nuevamente las vulnerabilidades de las instituciones públicas y del sistema político, aumentando la percepción de corrupción, la sensación de impunidad y erosionando la confianza ciudadana. En este contexto, cabe preguntarse si los programas de los candidatos presidenciales responden a los problemas de corrupción que el país está enfrentando. Es muy positivo que la mayoría dedique atención al tema, con propuestas que van desde el fortalecimiento de organismos como la Contraloría hasta la incorporación de inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción y trazabilidad digital de fondos públicos. Sin embargo, los diagnósticos y propuestas deberían fundamentarse mejor en la evidencia y en la experiencia internacional sobre políticas y prácticas anticorrupción.

Varios candidatos centran sus propuestas para combatir la corrupción en modernizar el Estado y reducir su tamaño, es decir, sus gastos y su personal. Las reformas orientadas a hacer al Estado más eficiente y moderno son, sin duda, necesarias y bienvenidas. Sin embargo, la premisa que subyace a la propuesta, según la cual un Estado grande es por definición más corrupto, carece de respaldo empírico. Los países menos corruptos del mundo, entre ellos varios del norte del Europa, cuentan precisamente con Estados grandes y con una presencia significativa en la provisión de servicios públicos. Lo que determina la probidad del Estado no es su tamaño, sino la solidez de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones.

De igual modo, equiparar el servicio civil con la ineficiencia y la corrupción es una interpretación errónea. Los índices internacionales sugieren que el nivel de corrupción administrativa en Chile es bajo, muy por debajo del promedio regional. Más bien, los mayores escándalos de corrupción detectados desde el retorno a la democracia en Chile corresponden a lo que podríamos llamar corrupción a gran escala, aquella que ocurre en el nivel de las élites políticas, donde los intereses públicos y privados se entrecruzan y los mecanismos de control y rendición de cuentas son más débiles. Para disuadir, prevenir y detectar este tipo de corrupción es necesario implementar controles reales sobre los flujos de dinero entre lo público y lo privado, avanzar en la tramitación del Registro Nacional de Beneficiarios Finales, fortalecer los organismos fiscalizadores y asegurar sanciones efectivas a la corrupción.

Según nuestra evaluación, los programas de los candidatos, en su mayoría, se enfocan en los síntomas de la corrupción más que en medidas profundas y transformativas. Aunque existe la tentación de creer en soluciones rápidas, la verdadera prevención de la corrupción requiere un cambio social, instituciones democráticas sólidas y un trabajo sostenido, con visión de largo plazo, para construir una cultura de integridad, ética y transparencia.

Del liderazgo al sondeo: la crisis de conducción política

Álvaro Pezoa
Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de Los Andes



El 2 de noviembre comenzó la veda de difusión pública de encuestas sobre las elecciones del 16. Sin embargo, esta restricción legal para el público no silencia las mediciones que reciben los comandos ni frenan las filtraciones vía redes sociales. En una sociedad hiperconectada, la prohibición es más simbólica que efectiva. Mientras tanto, la influencia de esos datos sobre las candidaturas –y los votantes más atentos– permanece intacta.

Esta paradoja invita a un cuestionamiento práctico: ¿de qué sirve callar las pesquisas si su poder de moldear expectativas, establecer temas y orientar decisiones de campaña no se detiene con el decreto? De paso, la veda hace patente la tensión entre transparencia democrática y control regulatorio. Y, todavía más, deja entrever un problema más profundo: el de una actividad política que se adapta a “lo que la ciudadanía siente” en lugar de guiarla.

La política experimenta actualmente una crisis de conducción, que se manifiesta en un giro radical en los roles políticos. Cuando los candidatos o partidos estructuran su contenido programático en torno a aquello que revelan las encuestas, y no en razón a un ideario o proyecto, la conducción se deteriora. El político se convierte en seguidor de una opinión pública “medida”, en vez de director de una visión de futuro.

El país necesita propuestas de planes de desarrollo, de líneas de acción que trasciendan la última foto de intención de voto. Cuando los comandos están constantemente leyendo sondeos y ajustando el discurso a sus hallazgos, la lógica se invierte: la campaña deja de ser la sugerencia de un proyecto al electorado y muta en un espejo de lo que éste percibe. ¿Dónde queda el genio político, el liderazgo, la capacidad de concebir el país en veinte años o más?

El mal de una política reactiva –más que propositiva– se agudiza cuando los incentivos de las campañas se centran largamente más en “posicionar” que en formular transformaciones; en “subir en las encuestas” en lugar de persuadir, educar y comprometer con un proyecto. Los sondeos ayudan a conocer las inclinaciones de los sufragantes, permiten calibrar estrategias y ajustar tácticas. Pero, si el horizonte de la política se reduce a maximizar resultados en encuestas, se olvida que la democracia es realmente valiosa cuando facilita el ingenio público, la deliberación abierta sobre fines –y medios– comunes, y la búsqueda conjunta de una mejor sociedad.

¿Se requieren candidatos que “reflejen” al electorado o que lo persuadan?, ¿gobernantes que “sigan” estudios de opinión o que anticipen el porvenir? ¿Se aspira a una política que se mimetice con el sentir público o que fortalezca la consecución del bien común? Los gobiernos deberían ser motores de futuro, no destellos del ánimo de ayer. La democracia vive cuando los ciudadanos no solo son “auscultados”, sino invitados a construir juntos el mañana.

LT latercera.com

Declaración de intereses en
www.grupocopesa.cl/declaracion
Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores
en sucursal virtual:
<http://sucursavirtual.latercera.com>



SANTIAGO DE CHILE |
AÑO 76

SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a
lector@latercera.com

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1400 caracteres con espacios a:

✉ Email: correo@latercera.com

✉ Avenida Apoquindo 4660, Santiago.

La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

ESPACIO ABIERTO

La ultraderecha y sus potenciales límites electorales

Javier Sajuria
Profesor de
Ciencia Política
Queen Mary University



Los avances de la ultraderecha en América Latina han sido mucho más rápidos que en el resto del mundo. Mientras en Europa estas fuerzas llevan años creciendo lentamente, en nuestra región han llegado de forma mucho más repentina. A los triunfos de Bolsonaro y Milei, es probable que se le sume el de Kast en algunas semanas. Si miramos más allá, a Trump o Bukele, sabremos que las consecuencias pueden ser complejas para las instituciones democráticas.

Hay distintas explicaciones para un fenómeno que ya es global. No es exagerado decir que pasamos de la idea de una democracia liberal como el modelo incuestionable, a una

era en que abundan los populismos y el liberalismo. Si bien estos procesos han tenido distintos colores políticos en el tiempo, el sabor que abunda hoy es el de la ultraderecha, que lo hace desde una plataforma basada en exclusión de grupos minoritarios, un popurrí de posturas ultraconservadoras y una mentalidad autoritaria.

En el caso de nuestra región, se suman las consecuencias de nuestro sistema presidencial. Mientras las democracias parlamentarias han logrado mantener cierto control al avance de las ideas más extremas, los mecanismos de elección presidencial, incluyendo las segundas vueltas, han fomentado el rápido ascenso de estos gobernantes. Enfrentados ante decisiones dicotómicas, los votantes eligen el que consideran el mal menor, y en un entorno con baja confianza pública, eso suele ser el candidato de oposición.

En un estudio que saldrá esta semana, preparado junto a Cristóbal Rovira (PUC) y Nerea Palma (UAH) y editado por la Fundación Friedrich Ebert, nos volcamos a los datos para tratar de entender qué pasa al otro lado de la ultraderecha. En Argentina, Brasil y Chile, una mayoría dice rechazar a los candidatos de ese sector, pero aun así logran posicionarse en el primer lugar de preferencias en un balotaje. Para ello, hicimos una radiografía de los límites electorales de la ultraderecha, analizando

a quienes no la apoyan y sus distintas preferencias.

Hay tres conclusiones clave del estudio. La primera es que este es un grupo diverso en todo sentido: socioeconómico, religioso, ideológico, etc. No hay una sola receta que sirva para movilizar a todo ese grupo, por lo que es importante considerar ofertas que sean atractivas e inclusivas. En sociedades altamente individualistas, eso es un desafío mayor. Lo segundo que comparten los detractores de la ultraderecha en estos tres países es una convicción sobre la importancia del control de armas. Siendo América Latina la región más violenta del mundo, es interesante observar que esta mayoría quiere mantener el armamento bajo control estatal en vez de entregarlo a la ciudadanía. Finalmente, estos electorados son diversos, pero unidos por un respeto a la democracia y un rechazo a quienes busquen desestabilizarla. El desafío es cómo visibilizar la amenaza que representa la ultraderecha a estas mismas instituciones.

Quizás estas conclusiones lleguen algo tarde ante la elección de un par de semanas más, pero pueden servir para una eventual segunda vuelta o, mejor aún, para motivar a los actores políticos que sí creen en la importancia de una democracia liberal a que mejoren sus estrategias de coordinación y movilización en el futuro.